

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR EL SERVICIO “DIGITALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DE VALORACIÓN DE LOS CENTROS BASES DE DISCAPACIDAD”

El Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, atribuye en su artículo 15 las siguientes competencias a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad:

- *1. El reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.*
- *2. La emisión de dictámenes e informes necesarios para la tramitación de prestaciones y la prestación de servicios especializados de atención básica en materia de información, orientación e intervención terapéutica.*

Los procedimientos anteriormente expuestos, a tenor del Real Decreto 1979/1999, de 23 de diciembre, sobre el procedimiento para el reconocimiento y valoración de la discapacidad, se regulan supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la que deben adecuarse en lo que se refiere a la tramitación del expediente administrativo. No obstante, esta última ley, exige y recoge una serie de consideraciones y de obligaciones para garantizar la implantación del expediente administrativo electrónico, que se está llevando a cabo de forma paulatina.

El sistema informático “Reconocimiento Grado de Discapacidad” RGM, implementado por el Ente Público de Derecho, Agencia Madrileña para la Administración Digital alberga los expedientes de valoración de la discapacidad de todos los usuarios de la C. Madrid.

Progresivamente, este aplicativo ha ido incluyendo las exigencias que, a través de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico y las leyes que le sucedieron, fueron estableciendo. En la actualidad, es expresa la obligación de las Administraciones de tramitar electrónicamente los expedientes de los ciudadanos, según establece la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común.

No obstante, para poder hacer realidad el expediente administrativo electrónico en su integridad, 100% en formato digital, resulta imprescindible proceder a la digitalización de los expedientes que total o parcialmente, contienen el formato papel.

La Real Academia de la Lengua Española define la digitalización como Convertir o codificar en números dígitos datos o informaciones de carácter continuo, como una imagen fotográfica, un documento o un libro.

Por su parte, el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre añade, para el ámbito de las Administraciones Públicas:

*2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.*

*Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.*

*3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de*



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **122254776155687123318**

*Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes reglas:*

*a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.*

*b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.*

*Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.*

Esto es, se ha de considerar que la certificación de la copia auténtica sólo puede ser emitida tras la elaboración del documento electrónico, con un sellado o firma digital que cumpla con los requisitos mínimos del ya referenciado Esquema Nacional de Interoperabilidad.

La labor de digitalización y copia auténtica, en la que no sólo se procede al escaneo de la documentación, sino a la elaboración de una copia auténtica, en los términos que establece el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común queda de manifiesto que se tratan de servicios a prestar por Entidades Acreditadas y autorizadas para poder verificar el cumplimiento de la normativa arriba referenciada en la obtención de las copias en formato digital.

Si consideramos desde el punto de vista práctico los trabajos a realizar, de escaneo, verificación y certificación, todas estas tareas resultan inapropiadas y no corresponden con la naturaleza de los trabajos definidos en la Ley de Contratos del Sector Público como contrato de obras o de suministro.

En este sentido, el artículo 17 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que son contratos de servicios “aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro”.

La imputación presupuestaria se efectuará con cargo al **Programa 231 C subconcepto 22709** de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para los años 2022 y 2023; en su caso, para lo no ejecutado en los ejercicios anteriores, en el 2024.

Es por lo que se propone realizar el contrato de Servicios **“DIGITALIZACIÓN Y OBTENCIÓN DE LA COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DE VALORACIÓN DE LOS CENTROS BASES DE DISCAPACIDAD”**

Madrid, a fecha del día de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **122254776155687123318**